



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, catorce de julio de dos mil veintitrés

A23-164

REFERENCIA:

DEMANDANTE

DEMANDADO:

Litis consorte:

Llamada en garantía:

RADICADO:

DECISIÓN:

APELACIÓN AUTO

JENIFER MATURANA BARBOSA

EST ACCIÓN S.A.S.

EMTELCO S.A.S.

ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. –CONFIANZA-

05001-31-05-002-2021-00050-01

CONFIRMA AUTO que niega excepción previa

Link:

[23-164 \(002-2021-00050\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por EMTELCO S.A.S. contra la decisión emitida el 20 de junio de 2023 mediante la cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín resolvió desfavorablemente la excepción denominada *falta de agotamiento de reclamación administrativa, falta de competencia*.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 23** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

Pretende la demandante que tras declararse la existencia de un contrato por obra o labor con la sociedad ACCIÓN S.A.S., que terminó de manera ilegal el 28 de noviembre de 2019, se condene al pago de \$302.351 correspondiente a los salarios dejados de percibir desde el 24 de noviembre de

2019 hasta cuando fue despedida; además de las cesantías e intereses a las cesantías en los montos que reseña; la sanción de un día de salario por cada día de mora, de un lado, por no consignar en un fondo las cesantías, y de otro lado, por no cancelar las prestaciones laborales al momento de la terminación del contrato. También solicita el reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa y las costas del proceso. En síntesis, aduce que fue enviada como trabajadora en misión a EMTELCO S.A.S. donde se desempeñó como asesora nivel intermedio, fue afiliada al sistema de seguridad social, habiéndose fenecido el vínculo de manera unilateral, adeudándose los haberes que deprecia.

Al contestar la demanda, ACCIÓN S.A.S. propuso como excepción previa la denominada *no comprender la demanda a todos los Litis consortes necesarios*. Adujo que EMTELCO era la empresa usuaria, facultada para dar órdenes e impartir instrucciones a los trabajadores en misión, estatus que tenía la demandante durante la vigencia de la relación laboral suscrita con la EST, razón por la que debía ser integrada por pasiva, en tanto era quien le reportaba el desempeño del tiempo efectivamente laborado.

Mediante auto del 11 de marzo de 2022 el juzgado de origen dio por contestada la demanda por parte de ACCIÓN S.A.S. e integró en calidad de litisconsorte necesario a EMTELCO S.A.S. al indicar que:

Por último, se advierte de la demanda y su contestación donde incluso se plantea la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario, la pertinencia de integrar a la empresa usuaria EMTELCO S.A.S, de la que se informa era la que facultada para dar órdenes o impartir instrucciones a los trabajadores en misión como la hoy demandante, durante la vigencia de la relación laboral.

Notificada la entidad aludida, procedió a contestar la demanda. En dicha oportunidad, EMTELCO S.A.S. propuso como excepción previa la que denominó *falta de agotamiento de la reclamación administrativa*, sustentándola de la siguiente manera:

“(…) es una Sociedad de Economía Mixta, descentralizada indirecta del Municipio de Medellín con una composición accionaria correspondiente al 50,001% pública y 49,999% privada. Nótese que el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre los factores que determinan la calidad de entidad pública, específicamente en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil M.P. Enrique Arboleda Perdomo. Radicado 11001-03-06-000-2007 -00020-00, se aclaró que para que una persona jurídica pueda calificarse como pública, es indiferente la proporción del aporte estatal, pues la mayor o menor proporción sirve para definir el tipo de entidad administrativa de que se trate, pero no para definir si posee o no carácter público.

Lo anterior significa que su naturaleza pública la faculta para solicitar de quien interponga una demanda laboral en su contra el agotamiento de la reclamación administrativa, reclamo que nunca se llevó a cabo por parte de la demandante respecto de los hechos y pretensiones de esta demanda, lo que implica que el Juez carece de competencia para conocer del proceso.

En efecto, el art. 6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece, como requisito previo, el agotamiento de la reclamación administrativa, en los siguientes términos (…)

De acuerdo a la norma en mención es improcedente iniciar una acción judicial si previamente no se agotó en debida forma la reclamación administrativa por parte de la demandante.

Nótese que la reclamación administrativa ha sido considerada por la jurisprudencia como un factor de competencia, como lo indicó la Corte Suprema de Justicia en sentencia 2334 de 1970 (...)

En relación con la reclamación administrativa como requisito de procedibilidad para acudir ante la justicia ordinaria laboral, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-792 del 20 de septiembre de 2006 con ponencia del Dr. Rodrigo Escobar Gil, expuso (...)

De lo definido por la Corte Constitucional, se debe reiterar que la reclamación administrativa consiste en el reclamo escrito del demandante sobre el derecho que pretenda, ahora, esto adquiere gran relevancia toda vez que lo que se busca es la oportunidad de asegurar la autotutela administrativa, es decir, que la misma entidad de derecho público, tenga la oportunidad de corregir el yerro en que presuntamente ha incurrido ésta o sus contratistas, de ahí que ante la falta de respuesta o ante una respuesta que no satisfaga las pretensiones reclamadas el demandante pueda acudir a reclamar dicho derecho ante la jurisdicción ordinaria.

Así mismo, de conformidad con lo que ha expuesto al respecto el Consejo de Estado, citando la obra de Carlos Betancur Jaramillo, en Sentencia del 03 de agosto de 2006, exp. 8633-05, C.P. Jesús María Lemus Bustamante, en donde determina que, para efectos de demandar una entidad pública, es menester de manera previa elevar la reclamación administrativa correspondiente (...)

Ahora bien, aclaro en los archivos de mi representada no reposa reclamación alguna por parte de la demandante sobre las pretensiones que persigue en el proceso de la referencia, por lo que no se discutieron pretensiones perseguidas a través del proceso que nos ocupa siendo requisito necesario que la reclamación administrativa se realice de manera previa a la interposición de la demanda ordinaria y sobre todas las pretensiones incorporadas en el libelo demandatorio.

Finalmente, pongo en conocimiento del despacho que la obligatoriedad de agotar la reclamación administrativa frente a mi representada como requisito de competencia, es una discusión ya zanjada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y de Medellín, tal y como se puede observar en la sentencia proferida dentro del proceso instaurado por la señora Luz Amparo Otalvaro vs EMTELCO, Claudia Cecilia Meneses vs EMTELCO y Francis Yasmin Arango vs EMTELCO los cuales me permito allegar junto con el presente escrito.

De lo expuesto, se concluye que en razón a la naturaleza jurídica de la entidad que represento la parte demandante debió presentar la reclamación administrativa por la totalidad de las pretensiones perseguidas a través del presente proceso, requisito que omitió en el presente caso, lo que implica que el juez de conocimiento carece de competencia para conocer del proceso.

En audiencia celebrada el 20 de junio de 2023, el a quo declaró NO probada la excepción previa aludida y condenó en costas a EMTELCO, fijando como agencias en derecho la suma de un SMLMV, decisiones contra las cuales dicha entidad interpuso y sustentó recurso de reposición y en subsidio apelación, el primero de ellos resuelto de manera desfavorable, siendo remitido el expediente a esta corporación para surtirse la alzada.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ AL DECIDIR

Adujo que la reclamación administrativa es necesaria agotarla cuando es la demandante quien llama a la parte, no así cuando la vinculación la ordena el despacho, bien de oficio o a solicitud de parte. Destaca que en este caso EMTELCO S.A.S. no fue demandada por la señora Jenifer Maturana, por ende, NO se le podía exigir tal requisito, menos aún al juez, quien NO ostentaba la calidad de parte sino de director del proceso.

Al resolver el recurso de reposición, señaló que NO se discute, para efectos procesales, la calidad de entidad pública que tenía EMTELCO. No obstante, el art. 6 del CPT y la SS establecía dicha obligación o requisito de procedibilidad para el demandante, y en este caso ella inicialmente no dirigió la acción contra aquella entidad, y por ende insiste que NO podía exigírsele el cumplimiento de ese requisito, ya que la vinculación se dio en virtud de lo dispuesto en el art. 61 del CGP que establece el Litis consorcio necesario cuando así lo establece el despacho, oficiosamente o a solicitud de parte, como en efecto ocurrió cuando ACCIÓN SAS formuló la excepción previa. Que en esa medida, al despacho NO se le podía exigir el agotamiento de la reclamación administrativa para poder vincular a la entidad. Tampoco era dable exigírsele a la accionante, posteriormente, el agotamiento de esta reclamación.

Que adicionalmente, debía tenerse en cuenta que NO podía negársele a las partes el acceso a la administración de justicia. Si bien la reclamación administrativa era un requisito procesal, lo cierto es que en este caso NO se daban los presupuestos para exigirse, máxime si claramente tenía como finalidad que la administración se pronunciara previamente a la presentación de la demanda para garantizar incluso el derecho de defensa y contradicción, materializado en este caso a través de la contestación de la demanda, donde se manifestó que NO existía ninguna responsabilidad respecto de la acción aquí incoada. Bajo este contexto, sería inocuo exigírsele tal requisito conociendo ya, de ante mano, la respuesta.

En cuanto a la condena en costas, señaló que el art. 365 del CGP establece que se impondrán a cargo de la parte de quien se declare no probada la excepción previa.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN EMTELCO S.A.S.

Que si bien la empresa fue llamada al proceso por el despacho, NO es menos cierto que al momento de dársele traslado de la demanda a EMTELCO, la parte la demandante debió haber *puesto en conocimiento la reclamación administrativa* respecto de los emolumentos deprecados, en atención a la calidad que ostenta la compañía, siendo de público conocimiento que es una sociedad de

economía mixta descentralizada indirecta del Municipio de Medellín, cuya composición accionaria era pública y privada.

Por ello, aunque inicialmente la entidad no estaba demandada, para interponer cualquier tipo de demanda previamente debió darse aplicación al art. 6 del CPT y la SS, insistiendo que, sin el agotamiento de tal reclamación, NO podía darse inicio a la acción, lo que bien pudo ocurrir al momento de dársele traslado, donde la demandante debió poner en su conocimiento cuales eran las solicitudes.

Igualmente considera que NO debe ser condenado en costas. Frente al punto indica que una excepción previa es un mecanismo de defensa de cualquier entidad para mostrar *sus calidades*, de ahí que fuese imperioso su formulación, sin que ello implicara la imposición de costas.

2.3. ALEGATOS EMTELCO S.A.S.

Solicita se revoque en su integridad el auto de fecha 20 de junio de 2023 a través del cual se rechazó la excepción previa de falta de agotamiento de reclamación administrativa y se condenó al pago de costas procesales para que, en su lugar se declare la prosperidad del mismo, se desvincule del proceso y, consecuentemente, se revoque la condena en costas. Expresamente indicó que:

En primera medida, resulta indispensable señalar que tal y como se encuentra acreditado en el plenario EMTELCO, es una Sociedad de Economía Mixta, descentralizada indirecta del Municipio de Medellín con una composición accionaria correspondiente al 50,001% pública y 49,999% privada. Nótese que el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre los factores que determinan la calidad de entidad pública, específicamente en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil M.P. Enrique Arboleda Perdomo, radicado 11001-03-06-000- 2007 -00020-00, en donde se aclaró que, para que una persona jurídica pueda calificarse como pública, es indiferente la proporción del aporte estatal, pues la mayor o menor proporción sirve para definir el tipo de entidad administrativa de que se trate, pero no para definir si posee o no carácter público.

Lo anterior, resulta particularmente relevante de cara al artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social el cual establece lo siguiente:

“Las actuaciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquier otra entidad de la administración pública solo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta”.

Nótese que el artículo referido previamente es claro al establecer que la existencia de un requisito de procedibilidad frente a las entidades que componen la administración pública, hecho que no puede pasar por alto el despacho al tratarse de una norma de orden público cuyo objeto es la protección del patrimonio estatal y un pilar del debido proceso, al ser una norma de carácter procesal y obligatorio respecto de la cual no existe una excepción expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico.

Por tal razón, si bien es cierto que mi representada fue llamada como litisconsorte necesario por el despacho, ello sólo podría implicar que EMTELCO no podría ser parte de la fijación del litigio y, consecuentemente, objeto de una condena en el proceso de la referencia al no haberse agotado el requisito de procedibilidad previamente reseñado y al no habersele otorgado la oportunidad de conocer de antemano los hechos y razones de la defensa para determinar la existencia de responsabilidad frente al objeto del litigio, al constituirse una clara vulneración al debido proceso.

Nótese que el artículo previamente reseñado es un texto que regula la vinculación de entidades estatales a un litigio en el cual pudieren ser condenadas por lo que, resulta absolutamente evidente que el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social regula expresamente los requisitos de procedibilidad de su vinculación al proceso, con independencia de si es de forma directa o de oficio por lo que, se reitera, el despacho no puede pretender desconocer una norma de carácter público y partir del supuesto en que no aplica en el caso de la referencia al tratarse de una vinculación de oficio pues ello contraría el objeto de la norma en cuestión. Lo anterior, si se tiene en cuenta que, tal y como ha sido ampliamente desarrollado a nivel jurisprudencial, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social vela por la protección del patrimonio público por lo que, en el caso en cuestión, para la procedencia de una condena económica en contra de mi representada, sí debió existir una reclamación administrativa previa, la cual, en todo caso, no obra en el expediente al no haber sido efectuada.

Por otra parte, llamo la atención del H. Tribunal en el hecho que, en el caso de la referencia, no hay lugar a una condena en costas en contra de mi representada por la no prosperidad de la excepción previa pues, mal se haría en condenar a una entidad pública por ejercer su derecho a la defensa y contradicción haciendo uso de los vehículos jurídicos que se encuentran dispuestos para el efecto en el ordenamiento jurídico. Por tal razón, me permito resaltar que, en el proceso de la referencia, la excepción previa propuesta no fue un ejercicio innecesario y caprichoso por parte de mi representada pues, por el contrario, tal y como fue expuesto previamente, el objeto de la misma es la protección del patrimonio público y, de acuerdo al ordenamiento jurídico, tiene vocación de prosperidad por lo que solicito al Tribunal se revoque dicha condena o, en el eventual e hipotético caso que no lo considere oportuno, se reduzca el valor de la misma al no ser proporcional con el contexto y la motivación en que fue propuesta.

3. PROBLEMA JURIDICO

Consiste en determinar si es inexorable agotar la reclamación administrativa respecto de una entidad que en forma oficiosa es vinculada como Litis consorte, y paralelamente establecer si en virtud de ello, debe declararse probada la excepción previa formulada por EMTELCO S.A.S.

4. CONSIDERACIONES

En primer lugar, se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo dispone el numeral 3º del artículo 65 del C.P.T y la SS, es apelable el auto que *decida sobre excepciones previas*.

Pues bien, la reclamación administrativa, en materia laboral fue establecida expresamente como un requisito de procedibilidad de la acción judicial, según lo dispuesto en el artículo 6° del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que reza:

“ARTICULO 6o. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta. Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción. Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, ésta reemplazará la reclamación administrativa de que trata el presente artículo.”

El referido artículo impone el agotamiento de una reclamación como presupuesto procesal, precisamente cuando ha de ser instaurada demanda laboral en contra de una entidad pública, dada su naturaleza, con el fin de que la entidad pueda dar solución al conflicto en forma directa y evitar llevarlo a la jurisdicción laboral. Basta acreditar que se presentó reclamación referida al derecho incoado y que la entidad negó su reconocimiento, o habiendo transcurrido el plazo legal para ello, no dio respuesta.

Dicho artículo define la reclamación administrativa como el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, exigencia erigida por el legislador como requisito de procedibilidad para el conocimiento y trámite por los jueces del trabajo, de las demandas que hayan de incoarse, como ya se indicó, en contra de las entidades de derecho público, como es la aquí demandada.

Hasta aquí es claro que tal requisito le compete agotarlo a la trabajadora ANTES de radicar la demanda contra una entidad pública. Empero, ello NO fue lo que sucedió, pues sus súplicas estuvieron dirigidas contra la empresa de servicios temporales. Cosa diferente es que el a quo, en virtud de sus facultades oficiosas, como director del proceso, tras haber sido incoada la acción, decidiese vincular a EMTELCO como Litis consorte necesario por pasiva.

Y es justo ahí donde dicha sociedad, de cara a la composición de su capital societario, se duele de que NO se hubiese agotado tal requisito de procedibilidad, lo que considera lesivo de su derecho de defensa y en ello cimenta la procedencia de su desvinculación de este trámite.

Empero, razón le asiste al juez cuando le recuerda que su llamado es oficioso, por lo que ninguna obligación previa podía imponérsele a la demandante, ni aún en el transcurso del proceso, dado que inocuo sería brindarle la oportunidad de solucionar un conflicto en la vía administrativa, cuando claramente se resiste a la prosperidad de las pretensiones en la vía judicial.

Recuérdese que lo pretendido por el legislador con dicha reclamación, además de fijar la competencia, tal y como lo ha indicado la jurisprudencia en multiplicidad de ocasiones, es que antes del sometimiento de la controversia al conocimiento del juez laboral, la parte resistente tenga la oportunidad de decidir si es procedente lo pretendido, es decir, brindarle a la entidad la opción de pronunciarse, buscándose de manera indirecta la solución del conflicto.

Bajo esta óptica, y aunque la Sala no desconoce la exigencia de la norma cuyo cumplimiento echó de menos el recurrente bajo las condiciones descritas, lo cierto es que escapaba al resorte de las competencias de EMTELCO, en el panorama que se dibuja, pronunciarse de fondo NO sólo con antelación a una demanda que ya está en curso, sino además solucionar el conflicto, pues, se insiste, otra es su postura. Es por ello, que conforme lo antes referenciado, para el caso de autos, ni siquiera se cumpliría la finalidad que persigue el requisito de procedibilidad.

Aunado a ello, el hecho de que la entidad pública no pueda revisar su actuación antes de ser sometida al conocimiento de la jurisdicción, precisamente se genera porque no es su acción u omisión lo que debate la accionante ante un juez sino las acciones u omisiones de quien identifica como empleador. No obstante, el juez goza de la potestad de analizar más allá de lo pedido, vinculando a quien considere necesario, y en uso de sus facultades *extra y ultra petita*, de ser procedente, imponer las condenas a que hubiere lugar.

En tal sentido, NO puede perderse de vista la importancia de la vinculación de EMTELCO a este proceso, pues más allá de establecer si se trata o no de un litis consorcio necesario, lo cierto es que con su llamado a juicio, no sólo se materializa el principio de economía procesal, evitando un desgaste innecesario de la administración de justicia respecto a las implicaciones que tendría la prosperidad de la pretensión impidiendo el surgimiento de un nuevo proceso para resolver los asuntos que de ello devienen, sino que además su intervención garantiza el ejercicio de derecho de defensa, pues es ésta y no otra la única oportunidad para presentar una verdadera oposición a las suplicas de la accionante.

COSTAS

Bastará con decir que al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General de Proceso, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable la formulación de excepciones previas. Es precisamente lo que aquí ocurre, siendo viable su imposición en aplicación de este criterio objetivo, sin que comporte una razón atendible de exoneración el hecho de que la entidad, al formular el medio exceptivo, únicamente está ejerciendo un mecanismo de

defensa, óptica bajo la cual, nunca sería procedente condenar en costas. No fue eso lo que consideró el legislador.

Finalmente, en cuanto a la inconformidad relacionada con la TASACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, esbozada al formular los alegatos, considera la Sala que, en uno u otro caso, NO es la oportunidad procesal para ello. Y es que si bien la Ley 1395 de 2010 incluyó la posibilidad de liquidarlas en la sentencia, dicho artículo fue derogado por el artículo 366 del C.G. del P. que estableció que *“Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior...”*, y en el numeral 5 de dicho artículo se indica que *“La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas”*, lo que significa que la oportunidad para interponer el recurso de apelación contra la liquidación de agencias en derecho no es otra que una vez notificado el auto de aprobación de las mismas. En consecuencia, como este punto del recurso se refiere a asuntos que deben ser tratados en su debida oportunidad procesal, esta Sala SE ABSTIENE de pronunciarse sobre la liquidación de las costas y agencias en derecho.

En consecuencia, se confirmará la decisión objeto del recurso de alzada. Las costas en esta instancia estarán a cargo de EMTELCO por no haber tenido éxito en la apelación. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$580.000 a favor de la parte actora.

5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA la decisión proferida el 20 de junio de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín mediante el cual declaró no probada la excepción previa formulada por una de las entidades llamadas a juicio, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **JENIFER MATURANA BARBOSA** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 1.039.465.611 contra la sociedad **ACCIÓN S.A.S.**, trámite al que se vinculó oficiosamente a EMTELCO S.A.S. y

también fue llamada en garantía SEGUROS CONFIANZA S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: costas en esta instancia a cargo de EMTELCO. Se fija como agencias en derecho la suma de \$580.000 a favor de la parte actora.

Lo resuelto se notificará por ESTADOS y se dispone devolver el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA


MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 121 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 17 DE JULIO DE 2023

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>